

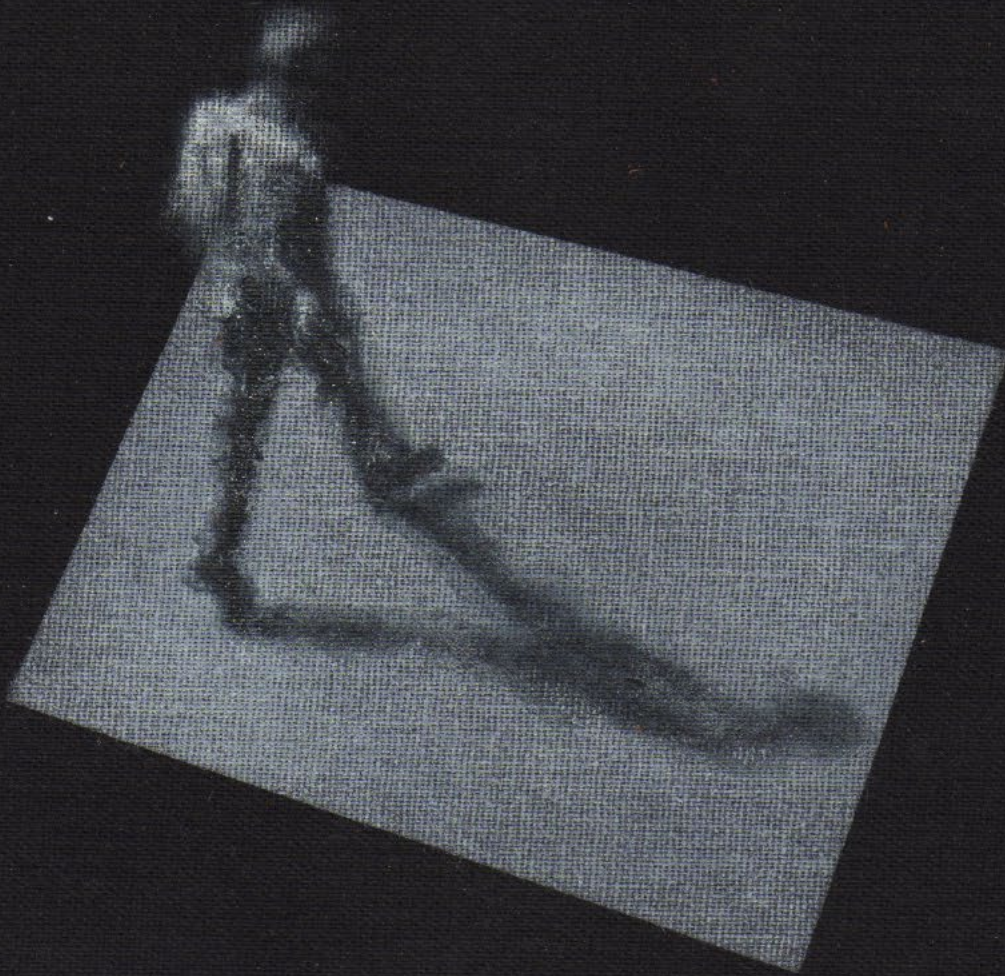
ORGANIZACIONES SOCIALES Y REDES DEL CUIDADO: ACTORES Y PRÁCTICAS CLAVES FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19

Andrea Di Croce Garay (Becaria CONICET en FAU)

Florencia Musante (Becaria doctoral CONICET en Instituto de investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. UNLP)

Violeta Ventura (Becaria Posdoctoral CONICET en el Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad (LECyS) de la FTS)

Imagen por Mauro Valentí



Introducción

Habitamos en ciudades donde las dificultades para acceder a la vivienda conviven con la concentración de la propiedad y con grandes porcentajes de vivienda ociosa o subutilizada. Muchas de las medidas estatales, lejos de atender las necesidades habitacionales de la población, actúan en favor de determinados sectores garantizando sistemas de apropiación privada del excedente, evitando la captación de plusvalía, vendiendo tierra pública, produciendo infraestructura urbana volcada a la reproducción de capital inmobiliario (zonificando, distritando, etc), entre otras. A su vez, (por acción o por omisión) sus prácticas dificultan (o no logran) la generación de mecanismos para que el valor producido por sus intervenciones sea redistribuido de manera equitativa; contribuye así a procesos de hiperconcentración en manos de los grandes desarrolladores inmobiliarios.

Ante este escenario, desde los movimientos sociales se construyen cotidianamente acciones de resistencia, de reclamo organizado y de atención de las necesidades mediante la acción colectiva. Invisibilizada, la ciudad informal, los barrios populares, están en permanente movimiento. Sabemos que la presencia de estas experiencias, conocimientos y saberes en el debate académico y en la construcción de alternativas es central; es por esto que, en el marco de las Segundas Jornadas de Geografía del Conflicto (FaHCE-UNLP), promovimos un panel en el que buscamos contribuir a ello invitando a compartir y poner en diálogo algunas de sus acciones frente a la crisis socio-sanitaria del COVID-19.

Para ello invitamos a integrantes de tres organizaciones sociales: Nelson Santacruz, comunicador, habitante del barrio 21-24 (CABA¹) y parte de la organización “La Poderosa”; Luz, trabajadora de la economía popular e integrante del Frente Popular Darío Santillán–Corriente Plurinacional; y Felipe Mesel, abogado e integrante del Área Derecho a la ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En base a sus exposiciones escribimos la presente contribución al *dossier*. Una versión anterior de este trabajo fue publicada en el libro *Geografías del Conflicto: crisis civilizatoria, resistencias y construcciones populares en la periferia capitalista*, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP), editado por Muchos Mundos en el año 2021.

La propuesta fue que compartan sus experiencias respecto a (I) los nuevos y viejos conflictos que emergieron o se potenciaron ante la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19; (II) sus miradas respecto a la gestión estatal (en sus distintos niveles y organismos) de dicha crisis y (III) la forma en que las trayectorias organizativas se pusieron en juego en esta coyuntura. A reponer esos intercambios nos dedicaremos en lo que sigue.

Viejos y nuevos conflictos

Antes de que los contagios masivos se instalaran en la agenda mediática argenti-

¹. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

na, tanto La Poderosa como ACIJ, alertaron sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentaban las villas y los barrios populares ante la crisis sanitaria venidera. Hicieron publicaciones en las redes sociales, presentaciones oficiales y denuncias demandando protocolos e intervención estatal preventiva, la cual no llegó sino después de desatadas las olas de contagio. Lxs tres panelistas fueron clarxs al respecto: la urgencia radicaba en que los nuevos problemas que implicaría el COVID- se posarían sobre los problemas estructurales de sus barrios.

Así fue y el COVID-19, además de abrir nuevos conflictos, potenció problemas frente a los cuales, según dice Luz, las organizaciones vienen “peleando, organizándose desde hace muchos años”.

En los barrios periféricos, las dificultades de acceder a derechos básicos se redoblan. Respecto a las condiciones de vivienda, los problemas edilicios (humedad, poco aislamiento térmico, inundabilidad, hacinamiento y falta de acceso a los servicios básicos) aumentan considerablemente los riesgos sanitarios de sus habitantes. También puertas adentro, una vieja problemática se vio potenciada con el COVID-19: las violencias de géneros. Tanto Nelson como Luz alertan sobre los riesgos que implicó durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que muchxs compañerxs se vieran forzadxs a convivir con quien lxs violenta.

Puertas afuera, las problemáticas estructurales también se pusieron en juego. Así por ejemplo, Felipe comparte que en los barrios populares porteños las prácticas represivas de las fuerzas policiales se profundizaron durante la pandemia. Algo similar sucede en el ámbito de la salud. Para Nelson su barrio (así como todos los barrios populares) tiene una doble batalla en dicho campo, ya que “a la par de una pandemia” deben “lidiar con una epidemia”: el dengue. A ello se suma que las ambulancias (y eventualmente los taxis) no acceden a todas las zonas del barrio, dificultando la atención a lxs pacientes afectadxs por ambos virus.

A su vez, la pandemia potenció conflictos nacidos de aquellos límites estructurales. El golpe que sufrió el mercado de trabajo informal se sintió especialmente en sus barrios, donde muchxs de lxs vecinxs se quedaron sin la posibilidad de hacer “changas”. Dicha problemática impactó en otros dos conflictos históricos. Por un lado, crecieron las dificultades para pagar los alquileres informales, lo cual se tradujo en nuevos desalojos y tomas de tierras, así como en un aumento del agrupamiento de familias y el hacinamiento. De igual modo, vecinxs de los barrios en los que residen o militan lxs panelistas, debieron abandonar sus lugares de residencia para mudarse a localizaciones devaluadas de la estructura urbana.

Por otro lado, el golpe al mercado laboral informal hizo que crezca la demanda de meriendas y platos de comida, repercutiendo en la capacidad de contención social de las organizaciones. En la villa 21-24, cuenta Nelson, esto puso en tensión y al borde del colapso al “sistema alimenticio autogestivo”. La mayor demanda impactó, no solo en los recursos materiales de los que disponen, sino también en las personas que están al frente de sus sistemas de contención autogestiva. Veremos más adelante que se trata, en la mayoría de los casos, de compañeras que se vieron sobrepasadas por el aumento de trabajo, sin que ello implique un correlativo aumento de recursos materiales, económicos ni simbólicos desde la estatalidad.

Por último, mencionar que la preexistente desigualdad en el acceso a teléfonos celulares, computadoras e internet se hizo más evidente a partir de que estos insumos pasaron a ser básicos. Las dificultades para acceder a ellos impiden desde la

gestión de permisos de circulación hasta la continuidad pedagógica de las infancias y juventudes de los barrios. Asimismo, el derecho a la alimentación y la ayuda estatal se vieron afectadas: tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por ejemplo, requiere no solo de acceso a internet y a una computadora, sino una “formación digital” que muchxs vecinxs no tienen. En suma, durante la pandemia, la ya consolidada brecha digital adquirió distintas formas y llegó a nuevos ámbitos de la vida cotidiana.

Evaluación de la gestión estatal

Un segundo eje de intercambio giró en torno a la intervención estatal frente a la pandemia.² Si bien lxs panelistas reconocen ciertas medidas tomadas por el Estado, insisten en que, frente a las condiciones extremadamente críticas que se viven en sus barrios, fueron intervenciones insuficientes, con demoras y sin la articulación necesaria con las organizaciones sociales.

Dentro de los puntos positivos reconocen algunas acciones ante el aumento de necesidades básicas y de las dificultades de muchas familias de acceder a un plato de comida. En particular, los programas de asistencia alimentaria coordinados con organizaciones sociales o garantizados a través de las instituciones escolares como el Servicio Alimentario Escolar. En la misma dirección, desde ACIJ reconocen cierto “activismo judicial” desde distintos actores estatales que buscaron garantizar accesibilidad a internet para niñxs, acceso al agua e incluso un protocolo específico para barrios populares. A escala nacional, Felipe destaca algunas regulaciones al mercado del suelo y de vivienda (como la prohibición de corte de servicios básicos, el Decreto 320/2020 de regulación de Alquileres y el Decreto 319/2020 que interviene sobre ejecuciones hipotecarias). Medidas esenciales, en tanto la vivienda, la salud y las condiciones de acceso a la ciudad están estrechamente relacionadas.

Sin embargo, como adelantamos, lxs panelistas coinciden en que fue una intervención insuficiente. Así por ejemplo, al mismo tiempo en que Felipe reconoce los intentos regulatorios por parte del estado nacional de algunas problemáticas urbanas, señala que en las villas continúa habiendo corte de servicios, desalojos y mecanismos estatales que impiden la posibilidad del acceso a una vivienda digna. Más aún, siendo este contexto un buen momento para repensar la forma de producir y habitar la ciudad, no se evidencia una batería de respuestas innovadoras por parte del Estado:

“la manera en que se atienden los desalojos en hoteles, conventillos, inquilinatos, pensiones, barrios populares da cuenta de lógicas que se vienen arrastrando y que están lejos de resolver el conflicto. Los créditos y subsidios parecen quedar chicos en este contexto, y se sigue construyendo una forma mercantil de acceso a la ciudad, etc.”

En la misma dirección, Nelson señala que en su barrio el Gobierno de la Ciudad

2. Tanto Nelson como Felipe se refieren a la intervención en los barrios populares y villas de la ciudad de Buenos Aires, mientras que Luz incorpora la mirada de Berisso, provincia de Buenos Aires.

llegó a destiempo “cuando todo ya estaba prendido fuego”. Además fue “desprolijo”. La primera vez que se implementó el Operativo DetectAr³, por ejemplo, tanto lxs portadorxs del virus como sus contactos estrechos⁴ fueron aisladx en los mismos espacios físicos; luego los contactos estrechos volvían al barrio sin un acompañamiento estatal viéndose en muchos casos obligadx a circular para garantizar su abastecimiento. Se generaba así malestar entre lxs vecinx quienes temían que el propio operativo promueva los contagios. Si bien con el paso del tiempo el operativo fue “puliéndose”, sus falencias informan sobre las dificultades estatales para asistir a los barrios.

La demora de la intervención estatal implicó pérdidas irreversibles. Ramona fue “una compañera de la villa 31” (CABA) que durante la pandemia denunció que llevaba semanas sin agua. La villa 31 “tiene toda la decoración que se imaginen, todo el marketing de la urbanización” pero no cuenta con redes pluviales y de agua. Ramona “gritó esa necesidad” dice Nelson, “y terminó muriendo tras un contagio de COVID”. También otrxs referentes y militantes de distintas villas de la ciudad (CABA) murieron ante la conjunción entre una enfermedad viral, las necesidades estructurales que sufren sus barrios y las demoras del Estado.

Finalmente, la necesidad de articulación de los gobiernos locales con las organizaciones que trabajan desde hace muchos años en estos barrios, aparece como central: “hay, a veces, cierto desconocimiento. Les pedimos que bajen, que caminen el barrio, que se pongan las botas, se embarren. Que estamos acá desde hace tiempo y es necesario articular”, enfatiza Luz. Por su parte, Nelson remarca que el Estado necesita indefectiblemente apoyarse en las “organizaciones sociales, y principalmente en las vecinas que son las que ponen el pecho”, figuras principales en garantizar aspectos básicos de la vida barrial. Las organizaciones sociales son y se proponen, entonces, como actores nodales de coordinación y llegada del Estado a los barrios.

La cuestión organizativa

De este modo, frente a los viejos y nuevos conflictos profundizados en el año 2020 y ante la insuficiencia de la acción estatal, la organización social fue la columna vertebral para la gestión de la crisis socio-sanitaria del COVID-19 en los barrios populares.

Como ya señalamos, destacan las actividades en los merenderos y comedores populares, que enfrentaron una afluencia cada vez mayor de personas ante el aumento de la desocupación y la creciente necesidad alimenticia. En este escenario, el rol de las mujeres de las organizaciones sociales requiere de una mención

³. Una estrategia nacional orientada a la detección masiva de personas infectadas de coronavirus y, mediante su aislamiento, evitar propagaciones exponenciales del virus.

⁴. Según el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, “se denomina contacto estrecho a toda persona que estuvo sin las medidas de protección personal adecuadas a menos de 2 metros de distancia de un caso confirmado durante 15 minutos o más o durante las 48 horas previas al inicio de los síntomas. También es contacto estrecho quien comparte habitación, baño o cocina con un caso positivo de COVID-19”. (<https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/glosario/contacto-estrecho>). Los contactos estrechos tienen un alto riesgo de haber adquirido la enfermedad por lo que deben cumplir 14 días de aislamiento preventivo.

especial, siendo pilares de las redes de cuidado comunitarias. En palabras de Luz fueron ellas “la primera línea, en todos los frentes” al momento de sostener la crisis del COVID-19. También lxs jóvenes organizadxs cumplieron un rol central. Al respecto, lxs panelistas sostienen que es indispensable que desde la estatalidad se reconozca y formalice la tarea (muchas veces invisibilizada) de las organizaciones y las compañeras que garantizan la reproducción de la vida barrial.

Destacan también las distintas estrategias que, apelando a la creatividad y la solidaridad, se dieron en las organizaciones para enfrentar diversas situaciones. Algunas de ellas fueron las campañas que buscaron captar donaciones. En el barrio 21-24, por ejemplo, La Poderosa lanzó la campaña “Contagiá solidaridad”, obteniendo recursos importantes para sostener los espacios alimenticios y de cuidado autogestivo del barrio. En este punto, Nelson señala que los aportes de la sociedad se impusieron sobre los recursos que otorgó el Estado de la ciudad de Buenos Aires. En el barrio de Luz, a las campañas de donaciones se sumaron las compras colectivas, con el objetivo puesto en “contener a todos, más en esta pandemia.”

En otro orden de cosas, las organizaciones sociales fueron medulares para difundir y denunciar la situación desigual de sus barrios en la pandemia. Hoy sabemos que la crisis del COVID-19 impacta de manera profundamente diferencial según las clases y grupos sociales; ahora bien el emplazamiento de esa premisa en la agenda pública fue, en parte, gracias a la acción comunicativa de distintas organizaciones sociales. Frente a la “curva de la desigualdad”, dice Nelson, la organización social fue fundamental para visibilizar las distintas formas en que golpea el COVID-19, para decir “che, esto es el problema de la desigualdad que hoy sale a flote y nos cachetea a toda la sociedad. Hagámonos cargo.”

Además de aportar a la difusión y a la contención básica, las redes solidarias y las organizaciones sociales, dice Nelson

“son el oxígeno que está sirviendo de soporte para que todo lo demás no colapse: las redes de apoyo escolar están complementando a la educación pública que no sabe cómo seguir con la continuidad pedagógica; las postas de salud y las promotoras de salud son el soporte para que las salitas y los hospitales no colapsen totalmente; las cocineras que están precarizadas, que no tienen ni un sueldo y que no son reconocidas simbólicamente por la sociedad, hoy le están dando de comer a millones de personas en todo el país y en todo Latinoamérica, y son el soporte del hambre y el desempleo”.

Eso se replica en todos los ámbitos de la vida barrial. La Poderosa, por ejemplo, conformó, en el barrio 21-24, la “Casa de la mujer y disidencias” donde se acompaña a personas travestis y trans — todxs ellxs en situación de emergencia habitacional y alimenticia— y a mujeres que sufren violencia de género.

Por último, la organización social, además de gestionar las crisis, crea horizontes de posibilidades y construye mundos comunes y posibles. Dicho de otro modo, además de dispositivos concretos para atravesar la pandemia generan motivaciones ya que “en medio de la desesperación encontrás algo en la organización que te empuja y te da más ganas de seguir. El hecho de ver a tu vecinx te empuja y te inspira a seguir organizándote”, dice Nelson. Luz, a su vez, refuerza “apostamos

a seguir trabajando, a seguir poniéndole el hombro, como antes, con la misma fuerza. Sabemos que no es fácil y no va a ser fácil. Pero si estamos así unidos y en organización algo vamos a lograr”.

Para finalizar, en los barrios abordados se generaron, frente al COVID-19, nuevas redes de comedores, de salud y comités de crisis. Que ello se haya dado con celeridad y eficacia no es casual; por el contrario, sostiene Nelson que “fue posible por un valor muy importante que tiene este país, pero sobre todo que tienen los barrios populares (...) estamos organizadxs y eso se debe a la cultura misma de la militancia villera”. Así, la historia política y social de los barrios populares en Argentina, se actualiza en esta crisis mundial y se convierte en una herramienta imprescindible para afrontarla.